

Rancagua, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece el abogado Pablo San Martín Cornejo en representación de la demandante doña Ana María Guerrero Ponce, y deduce recurso de nulidad contra la sentencia definitiva dictada con fecha 9 de noviembre de 2020 por el Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, en sus antecedentes RIT O-85-2019, que acogió la demanda principal sólo en cuanto se deja sin efecto el término de la relación laboral suscrita entre las partes y el decreto alcaldicio 1217, ambos de 30 de septiembre de 2019, ordenándose la reincorporación de la demandante a su cargo y labores que desempeñaba con anterioridad a su desvinculación y; acoge además, la demanda conjunta, sólo en cuanto la demandada deberá pagar a la actora todas las remuneraciones devengadas desde el término de la relación laboral, que se ha dejado sin efecto, hasta la fecha de su efectiva reincorporación, incluyendo en ellas todas las asignaciones y bonificaciones que le hubieren favorecido de no haber sido desvinculada, con intereses y reajustes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo.

Interpone su recurso fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia definitiva haya sido pronunciada con infracción de ley que hubiere influido en lo dispositivo del fallo.

Igualmente, respecto de la referida sentencia, deduce recurso de nulidad la abogada Fernanda Alarcón, en representación de la parte demandada Ilustre Municipalidad de Peumo.

Hace consistir su arbitrio, en los vicios de nulidad previstos en los artículos 477 del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia definitiva con infracción de ley que hubiere influido en lo dispositivo del fallo; 478 letra b) del mismo código, por haberse



dictado la sentencia con infracción de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a la sana crítica y, en el previsto en el artículo 478 letra e), en relación con el artículo 459 N° 4, del código citado, porque se ha omitido el análisis de toda la prueba rendida.

En la audiencia del día 2 de febrero de 2021, los abogados de las partes alegaron por las pretensiones de sus representados, hechas valer en estos antecedentes.

Finalizadas las exposiciones de los intervinientes se puso término al debate, quedando la causa en estado de alcanzar acuerdo, y producido éste, se procede a dictar el siguiente fallo.

Considerando:

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD DEL DEMANDADO

Primero: Que, para un mejor orden de la decisión se comenzará analizando el recurso interpuesto por la parte demandada, quien como fundamentos de su arbitrio de nulidad, explica como antecedente previo que en esta causa comparece doña Ana Guerrero deduciendo demanda en contra de la Ilustre Municipalidad de Peumo, representada por don Fermin Alejandro Carreño Carreño, en el marco de la ley 20.919, sobre incentivo al retiro voluntario, solicitando la reincorporación a sus funciones laborales, pidiendo se declare que tiene derecho a desistimiento, dejando sin efecto el término de la relación laboral suscrito por las partes con fecha 30 de septiembre de 2019, con cobro de prestaciones laborales adeudadas de acuerdo a lo anterior.

Agrega que la demandante funda su acción en el hecho de que, habiendo postulado al bono que otorga la ley de incentivo al retiro, ley N°20.919, no se le notifica en forma legal el resultado de los procesos de postulación a la bonificación, y que posteriormente, se le realiza una transferencia electrónica con el monto total del bono, firmando término de la relación laboral con reserva de acciones de reintegro y prestaciones derivadas. Junto a



lo anterior, acciona por el cobro de prestaciones laborales adeudadas en virtud de lo establecido en el artículo 45 de la ley N°19.378, que implican asignaciones especiales de carácter transitorio que pueden otorgarse a funcionarios.

Segundo: Que, luego, en cuanto al primer vicio de nulidad reclamado por la demandada, referido a la infracción de ley, sostiene que en el caso precedente, quedó demostrado que la demandante efectivamente manifestó libre y espontáneamente su ánimo de renuncia, a efectos de que su representada presentara sus antecedentes ante la autoridad competente, para que ella postulara al beneficio. En dicho contexto, la demandante al cumplir con los requisitos destinados a adquirir dicho bono, se le notifica su aceptación al retiro voluntario, como se acreditó en la causa. A este respecto, la funcionaria durante todo el tiempo que media entre la notificación de dicho beneficio y su efectivo retiro, no manifestó expresamente el ánimo de desistir del beneficio ni dejar sin efecto su renuncia, para adquirir el bono.

Dice que la norma - artículos 3 y 4 de la Ley 20.919 - señala en forma clara que la renuncia de dicho derecho debe ser de manera expresa, a efectos de ser comunicada a la entidad que otorga el bono, para que lo reasigne a otro funcionario que haya postulado y no lo recibió. Asimismo, se debe destacar que el plazo señalado en el inciso final del artículo 4°, determina el cese material del ejercicio de la función desplegada.

Agrega que el sentenciador incurre en error en los considerandos octavo y noveno, al considerar que la renuncia nunca fue manifestada por la demandante, que hubo un desistimiento tácito al beneficio, ya que la actora no informó dentro del plazo su "renuncia definitiva".

Todo lo anterior no hace más que confirmar que la errónea interpretación de la ley ha influido



sustancialmente en lo dispositivo del fallo, debido a que si el juez hubiera apreciado con mayor detención y de forma correcta el régimen jurídico aplicable, es decir la Ley N° 20.919 y su reglamento, hubiera llegado a la conclusión que dicho acto tiene la necesaria seguridad jurídica, debiendo para ello desestimar la demanda en su totalidad.

Tercero: Que, en subsidio del anterior, la demandada incoa como causal de nulidad la prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Para ello desarrolla en qué consisten las reglas de la sana crítica y las conceptualiza. Luego, en lo que importa, señala que el tribunal de primera instancia yerra al apreciar la prueba documental, al estimar en su considerando séptimo que la carta de renuncia enviada por la actora no producía efecto alguno, toda vez que no se indicó en ella la fecha en que se dejaría definitivamente el cargo y el total de horas que servía.

Refiere que tal razonamiento infringe las reglas de la sana crítica toda vez que, en la fijación de los medios de prueba no se establece como hecho a probar si la renuncia está bien realizada o si surte efectos, el punto a discutir en la demanda principal, sólo se refiere a probar si la demandante se le impidió hacer uso del derecho a desistimiento, hecho que no dice relación con si la carta de renuncia cumple con las formalidades. Sustenta su reclamo, además, en la teoría de los actos propios y en una lata exposición que pretende explicar la forma errónea en que el tribunal valoró la prueba.

Cuarto: Que, por último, también de manera subsidiaria, interpone como motivo de nulidad el establecido en el literal e) del artículo 478 del Código del Trabajo, en cuanto la sentencia se hubiere dictado



con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501, inciso final, de este código, según corresponda. Específicamente se remite al artículo 459 N° 4 que indica, "La sentencia definitiva deberá contener: El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación".

Funda el vicio en que el punto fijado como hecho a probar, en cuanto a la demanda principal en audiencia preparatoria fue "Efectividad de que a la trabajadora se le impidió hacer uso de desistimiento contemplado en el art. 4° de la ley 20.919. En este sentido es evidente que el fallo no goza del debido análisis de la prueba en forma íntegra, pues el único punto de prueba fijado al efecto, versaba sobre el impedimento que se podría haber configurado en cuanto no dejar desistirse del retiro a la ex funcionaria. Jamás se vislumbró como hecho a probar si el término de la relación laboral se ajustaba a derecho, o si la epístola de renuncia cumplía con los requisitos legales, por lo que la sentencia se hace cargo de temas que no están relacionados con las probanzas del juicio. A pesar de lo anterior, el juez no se pronuncia con respecto a este punto de prueba al dictar sentencia, por lo que no ha dado cumplimiento a la obligación legal que le impone el art. 459 del código del trabajo.

Quinto: Que, en relación al primer vicio de nulidad reclamado, esto es, la infracción de ley, cabe tener en cuenta que aquel sólo busca la recta aplicación del derecho, circunscribiéndose al aspecto meramente jurídico, sin posibilidad de modificar los hechos, por lo que para decidir el destino del recurso incoado se debe estar a los hechos asentados en la sentencia.

Sexto: Que, las normas que se dicen infringidas son los artículos 3 y 4 de la Ley 20.919 que establecen en lo que importa, el primero: "(...) Para acceder a la bonificación por retiro voluntario, los funcionarios y



funcionarias deberán postular en el respectivo consultorio de Atención Primaria de Salud comunicando su decisión de renunciar voluntariamente, en los plazos y forma que fije el reglamento. Una vez concluido el período de postulación, los consultorios de Atención Primaria de Salud deberán remitir las postulaciones a los Servicios de Salud respectivos, y éstos las enviarán a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la cual mediante resolución determinará los beneficiarios y las beneficiarias de los cupos correspondientes a un año (...).

(...) Los funcionarios y funcionarias que resultaren beneficiarios y beneficiarias de cupos deberán informar por escrito al Departamento de Recursos Humanos o a la unidad que defina el consultorio respectivo, a más tardar el último día del mes siguiente a la fecha de dictación de la resolución a que se refiere el inciso segundo, la fecha en que dejarán definitivamente el cargo y del total de horas que sirvan. Esta deberá hacerse efectiva a más tardar dentro de los noventa días corridos siguientes al vencimiento del plazo para fijar la fecha de renuncia definitiva o dentro de los noventa días corridos siguientes al cumplimiento de 65 años de edad, si esta fecha fuere posterior a aquella (...).

Luego, el artículo 4 añade "Si un funcionario beneficiario o funcionaria beneficiaria de un cupo indicado en el artículo anterior se desistiere de su renuncia voluntaria, el consultorio de Atención Primaria de Salud informará al Servicio de Salud respectivo para que éste dé cuenta de manera inmediata a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a fin de que ésta proceda a reasignar el cupo siguiendo el orden del listado contenido en la resolución que determinó los beneficiarios y beneficiarias del año respectivo(...)".

Séptimo: Que, conforme a las normas transcritas, el juez del grado tuvo por establecido que la demandante postuló a la bonificación por retiro voluntario en el



respectivo consultorio de Atención Primaria de Salud comunicando su decisión de renunciar voluntariamente, acto seguido, en el considerando Séptimo de la sentencia recurrida, el juzgador establece como un hecho de la causa que la demandante no hizo efectiva su renuncia dentro del plazo establecido en la ley y en el reglamento respectivo y, en el considerando Octavo establece que la actora no se desistió expresamente de su beneficio, pero entiende que tácitamente se ha desistido al no informar oportunamente la fecha en que dejaría el cargo, conforme lo ordenan los artículo 16 y 18 del Reglamento de la Ley 20.919.

Octavo: Que, los hechos así establecidos lo son en función de la interpretación que el juez hace de las normas antes citadas y, de la carta presentada por la demandante al Jefe del Departamento de Salud de Peumo, que señala en lo pertinente, "Presento renuncia correspondiente (...)", sin indicar la fecha en que ésta se hace efectiva.

Noveno: Que la Ley 20.919, como su epígrafe lo dice, otorga una bonificación por retiro voluntario al personal regido por la Ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Para postular a dicha bonificación, la citada ley establece dos requisitos principales, según se desprende de los artículos 1, 2, 3 de la ley antes indicada y; 7, 8 y 10 y siguientes del Reglamento para el Otorgamiento de La Bonificación por Retiro Voluntario y Otros Beneficios Establecidos en La Ley N° 20.919 y que son, primero, comunicar la decisión de renunciar voluntariamente a una dotación de salud municipal respecto del total de horas que se sirve y; segundo, hacer efectiva la renuncia voluntaria en los plazos y según las normas contenidas en la ley y en el reglamento.

Décimo: Que, tal como lo señala el sentenciador, el artículo 16 del reglamento ya mencionado establece que



"(...) Se entenderá que las y los funcionarios que no comuniquen y hagan efectiva su renuncia en el plazo dispuesto en el inciso segundo, se desisten del beneficio (...). Luego el artículo 18 agrega en su inciso cuarto "Se entenderá que se desiste la funcionaria o el funcionario que no cumple con informar la fecha en que dejará el cargo dentro del plazo dispuesto en el artículo 16 de este reglamento".

De lo anterior, se desprende que el juez del fondo ha dado cumplimiento estricto a la normativa vigente al entender que la demandante se ha desistido tácitamente de la renuncia voluntaria a una dotación de salud municipal respecto del total de horas que sirve, puesto que sin perjuicio que presentó una carta que pretendía hacer efectiva la renuncia inicialmente manifestada, aquella no cumplía con los requisitos exigidos por los artículo 16 y 18 del reglamento respectivo, en cuanto a informar la fecha en que se debía dejar el cargo, condición expresamente establecida en el artículo 18 del citado reglamento.

Por lo demás, el desistimiento tácito establecido está directamente relacionado y corroborado con la voluntad manifestada por la actora al hacer la reserva de acciones al momento de firmar el documento que le hacía entrega del dinero objeto del beneficio, por lo que esta Corte no divisa la infracción de ley alegada por la recurrente, quien sólo se limita a hacer referencia a los artículo 3 y 4 de la Ley 20.919, pero nada dice respecto de los artículos 16 y 18 de su reglamento que complementan y completan las disposiciones de la señalada ley.

Undécimo: Que, lo anterior, es coherente con el hecho de que el instituto de la renuncia es un acto de disposición que debe ser interpretada restrictivamente, por lo que en la especie la renuncia definitiva a la dotación de salud municipal, es un acto de disposición de



relevancia para quien se ha desempeñado durante largo tiempo en una institución de salud y, que debe por lo tanto, ser interpretado restrictivamente, lo que implica que antes de otorgar la bonificación por retiro discutida, se debe verificar el cumplimiento estricto de la normativa establecida al efecto, lo que en el caso concreto no ha sucedido.

Duodécimo: Que, en definitiva, el juez del fondo, conforme a los hechos establecidos en la sentencia, los que se sustentan en la prueba aportada al juicio, ha aplicado correctamente los artículos 3 y 4 de la Ley 20.919 y su Reglamento, por lo que el vicio alegado será desestimado.

Decimotercero: Que, en cuanto a la primera causal subsidiaria interpuesta por el demandado, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, cabe precisar que la causal alegada ataca el proceso de reflexión que ha utilizado el juez para llegar a su conclusión o decisión. En efecto, el sistema de valoración de la prueba basado en la sana crítica descansa en un método racional, donde el juez, sin perjuicio que no tiene prefijados el peso, ponderación y jerarquización de los medios de prueba, no es absolutamente libre para decidir, puesto que se encuentra limitado conforme lo dispone el artículo 456 del Código del Trabajo, por las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos o técnicos.

Por lo tanto, al cuestionarse por el recurrente el proceso de valoración de la prueba llevado adelante por el sentenciador del grado, debe indicar, como sostenidamente lo ha señalado esta Corte, cuál de las



reglas referidas ha sido infringida, como lo han sido y cuál es su influencia en lo dispositivo del fallo.

Decimocuarto: Que, del análisis del recurso aparece que el recurrente se limita a hacer protestas de carácter general y discrepar del resultado de la valoración probatoria efectuada, sin ser capaz de identificar las reglas de la sana crítica supuestamente vulneradas, si son los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o conocimientos científicos asentados, menos aún, puede señalar de qué manera esas reglas han sido violentadas y como han influido en lo dispositivo del fallo, lo que imposibilita a este tribunal de alzada, dada la naturaleza estricta de recurso, acoger en este aspecto la impugnación deducida.

Decimoquinto: Que, en efecto, el recurrente lo que hace en su lata argumentación, es otorgarle una valoración distinta a la prueba incorporada al juicio y, desde allí, interpreta los hechos a su manera pidiendo a esta Corte que acepte sus razonamientos y no los del sentenciador a modo de un recurso de apelación, lo que no es permitido hacer a través del vicio de nulidad interpuesto.

Decimosexto: Que, finalmente, en cuanto a la segunda causal subsidiaria de nulidad interpuesta por el recurrente, prevista en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, específicamente, con la omisión de los elementos exigidos en el artículo 459 N° 4 del referido código, que exige que "La sentencia definitiva deberá contener: El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación", cabe recordar que lo alegado por el impugnante es que el fallo no hace el debido análisis de la prueba en forma íntegra, pues el único



punto de prueba fijado al efecto, versaba sobre el impedimento que se podría haber configurado en cuanto no dejar desistirse del retiro a la ex funcionaria. Jamás se vislumbró como hecho a probar si el término de la relación laboral se ajustaba a derecho, o si la epístola de renuncia cumplía con los requisitos legales, por lo que la sentencia se hace cargo de temas que no están relacionados con las probanzas del juicio. A pesar de lo anterior, el juez no se pronuncia con respecto a este punto de prueba al dictar sentencia, por lo que no ha dado cumplimiento a la obligación legal que le impone el art. 459 del código del trabajo.

Decimoséptimo: Que, lo reclamado por el recurrente no dice relación con ninguno de las exigencias señaladas en el artículo 459 N° 4 del código del ramo, sino que más bien con la disconformidad de éste con los hechos establecidos por el tribunal en relación con los puntos de prueba fijados, situación que no es cubierta por la causal incoada.

No obstante lo anterior, lo cierto es que el juez a quo se hace cargo del reproche del recurrente en el motivo Décimo del fallo recurrido, explicando las razones que tiene en cuenta para resolver como lo hizo, por lo que la causal de nulidad incoada no podrá prosperar.

En todo caso, los razonamientos desarrollados por el sentenciador en su sentencia dan cuenta de los hechos respecto de los cuales el impugnante reclama que no se



pronunció, puesto que al referir que el desistimiento de la renuncia se produjo tácitamente, indirectamente o implícitamente se ha pronunciado sobre aquellos.

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD DEL DEMANDANTE

Decimoctavo: Que, la parte demandante deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2020, pronunciada por el Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, en sus antecedentes RIT O-85-2019, sólo en cuanto la referida sentencia rechazó el otorgamiento de la bonificación transitoria del artículo 45 de la Ley N° 19.378.

Funda su impugnación en la causal de nulidad establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, estos es, la infracción de ley.

Señala que el artículo 45 de la Ley N° 19.378 prescribe que "con la aprobación del Concejo Municipal, la entidad administradora podrá otorgar a sus funcionarios una asignación especial de carácter transitorio. Dicha asignación podrá otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel, categoría funcionaria o especialidad del personal de uno o más establecimientos dependientes de la municipalidad, según las necesidades del servicio. En cualquier caso, dicha asignación deberá adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad administradora. Esta asignación transitoria durará, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año".

Agrega que la interpretación que el tribunal ha hecho de la forma en que la municipalidad ha obrado, respecto de la norma jurídica en comento contraviene la interpretación administrativa contenida en los dictámenes N° 4125 de 1998 y N° 60.065 de 2005, de Contraloría General de la Republica, según los cuales la asignación transitoria no puede servir de medio para incrementar



remuneraciones y debe ser establecida en términos genéricos, esto es fijarse de acuerdo con el nivel, categoría funcionaria o especialidad del personal de uno o más establecimientos, como lo señala expresamente la norma citada.

Decimonoveno: Que, como se dijo en el fundamento quinto de esta sentencia, la causal de nulidad entablada sólo busca la recta aplicación del derecho, circunscribiéndose al aspecto meramente jurídico, sin posibilidad de modificar los hechos, por lo que para decidir el destino del recurso incoado se debe estar a los hechos asentados en la sentencia.

En ese contexto, en el considerando undécimo de la sentencia recurrida, se deja establecido que la asignación demandada es transitoria y facultativa en su otorgamiento y, que por último, debe ser aprobada por el Concejo Municipal y adecuarse a las necesidades del servicio y a la disponibilidad presupuestaria, lo que por lo demás, se describe en la norma que se dice infringida.

Luego en el motivo décimo de la citada sentencia se agrega que "de las declaraciones del alcalde, en su calidad de representante legal de la demandada, como del memorando 140/2020 de 18 de mayo de 2020, exhibido por la demandante, que da cuenta de la nómina de pago de la mencionada asignación, no puede colegirse que tal nominación se haya hecho arbitrariamente, discriminando o buscando el perjuicio de la demandante.

En dicha nómina, además, se aprecia que se han visto favorecidos funcionarios de varias categorías, por lo que no existe razón para extender a todos los funcionarios de una de ellas, lo que constituye, en todo caso, una facultad privativa del municipio.

Vigésimo: Que, de los razonamientos anteriores no se desprende que el juzgador haya estimado que la asignación o bono reclamado constituye un medio para incrementar remuneraciones, sólo es posible entender que razona en



torno al incumplimiento de los requisitos exigidos en la citada disposición para tener derecho al referido bono.

Lo pretendido por la recurrente es que se acoja su impugnación sobre la base de hechos que no se han establecido en la sentencia, tales como que se ha estimado la asignación como un medio para incrementar remuneraciones o que no se ha aplicado de manera genérica, circunstancia que no es posible acoger, puesto que como se ha dicho, en el contexto de la causal invocada no es posible tocar los hechos, pues su fijación es privativa de los jueces del fondo, razón por la cual el recurso será rechazado.

Con lo razonado y lo dispuesto en los artículos 474, 478, 479, 480, 481 y 482 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la abogada Fernanda Alarcón, en representación de la parte demandada Ilustre Municipalidad de Peumo, contra la sentencia definitiva dictada con fecha 9 de noviembre de 2020 por el Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, en sus antecedentes RIT O-85-2019.

II.- Que, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por el abogado Pablo San Martín Cornejo en representación de la demandante doña Ana María Guerrero Ponce, contra la sentencia definitiva dictada con fecha 9 de noviembre de 2020 por el Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, en sus antecedentes RIT O-85-2019, y en consecuencia, **no es nula**.

III.- Que no se condena en costas a los recurrentes, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese.

Redacción del Ministro don Michel González Carvajal.

Rol Corte 466-2020-Reforma Laboral.



**Pronunciada por la Primera Sala de esta Il. Corte
Apelaciones,** integrada por los Ministros Sr. Michel
González Carvajal y Sra. Bárbara Quintana Letelier y la
Fiscal Judicial Subrogante Sra. Andrea Alfaro de la
Fuente.

No firma la Sra. Bárbara Quintana Letelier, no
obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la
presente causa, por encontrarse con permiso de
conformidad a lo previsto por el artículo 347 del Código
Orgánico de Tribunales.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Michel Anthony Gonzalez C. y Fiscal Judicial Andrea Alfaro D. No firma la Ministra Sra. Bárbara Quintana Letelier, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso de conformidad a lo previsto por el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales. Rancagua, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

